



No se pueden crear unas reglas de juego 'ad hoc' para que quienes han ejercido la violencia o han sido cómplices de los terroristas se puedan incorporar a la vida democrática. La viuda del dirigente socialista Fernando Buesa y presidenta de la fundación que lleva su nombre, Natividad Rodríguez, exigió ayer al Gobierno con estas palabras que no se establezcan medidas específicas para los presos en caso de un hipotético final de la violencia.

Durante la presentación de un libro que recoge cómo se ha modificado en cuarenta años la perspectiva social sobre las víctimas, Rodríguez mostró su «preocupación» sobre la manera en que, desde ciertos sectores, se pretende favorecer el regreso del entorno etarra a las instituciones democráticas si la banda desaparece. Su análisis llega días después de la reflexión del presidente del PSE, Jesús Eguiguren, que aboga por un pacto entre los partidos vascos sobre los reclusos y la legalización de Batasuna.

La presidenta de la Fundación Buesa entiende que el sufrimiento de las víctimas no puede ser inútil, por lo que exigió que no se modifiquen las actuales reglas del juego para configurar una serie de medidas especiales sólo válidas para los ex terroristas y quienes en el pasado les respaldaron. «Eso sería inadmisibles», aseguró, antes de subrayar que, en cualquier caso, deberían atenerse al actual Estado de Derecho. Reclamó al Gobierno, en este sentido, que ante un hipotético final de ETA afronte esa etapa «sin prisa» y haciéndolo «bien».

Rodríguez advirtió que ante un nuevo proceso de pacificación el papel de los colectivos de damnificados deberá ser el de hacer hincapié en la «importancia de la memoria» y la «construcción del relato» de todas estas décadas de barbarie. Porque la narración de cuarenta años de terrorismo no puede construirse a través de las valoraciones de «los que han usado la violencia o han sido cómplices de ella». No obstante, pidió a las formaciones políticas que no usen a las víctimas con «fines partidistas».

«Incomodidad»

La reflexión se produjo durante la presentación de 'La visibilidad social y política de las víctimas', un libro promovido por la Fundación Buesa y la asociación Aldaketa que recoge el testimonio de tres mujeres que han liderado diferentes entidades en defensa de los derechos de los damnificados de ETA: Ana María Vidal-Abarca (ex presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo), Cristina Cuesta (al frente de Covite) y la propia Natividad Rodríguez.

El trabajo subraya cómo, «durante muchos años, los gobernantes han ocultado su realidad y a la propia sociedad vasca le incomoda asumir cuál ha sido su comportamiento respecto a las víctimas». Los promotores del volumen, basado en las reflexiones de una jornada de trabajo llevada a cabo el 23 de octubre de 2008, consideran que la proyección social y política de los damnificados es aún «una asignatura pendiente» a pesar de que en los últimos años se han producido «avances». Los afectados por la violencia entienden que buena parte del cambio de percepción de los ciudadanos se ha debido a los «propios familiares» de las víctimas que dieron «los pasos más importantes para poder hacerlas visibles en la sociedad». Una labor de reconocimiento que, en su opinión, «no ha sido ni va a ser fácil», a pesar de que con el paso de los años se haya logrado «el mayor rechazo de la sociedad vasca a la violencia terrorista, el inicio de la deslegitimación del terrorismo y la puesta en marcha de medidas» como la Ley de Víctimas.